



Asamblea General

Distr. general
20 de febrero de 2012

Español e inglés solamente

Consejo de Derechos Humanos

19º período de sesiones

Tema 3 del programa

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Exposición escrita* presentada por Human Rights Advocates, Inc., organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[11 de febrero 2012]

* Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en los idiomas tal como ha sido recibida de la organización no gubernamental.

Prisiones privadas, trabajo penitenciario, y sus implicaciones a los derechos humanos

Human Rights Advocates (“HRA”) somete esta declaración para llamar atención a la privatización de prisiones y a la creciente tendencia hacia el trabajo penitenciario forzado. Mientras que varios países recurren a la privatización para reducir gastos, el avance adicional hacia la legitimización del trabajo penitenciario lleva graves implicaciones, planteando preocupantes paralelos con la esclavitud.

La privatización de funciones tradicionalmente públicas, como el cuidado de la población carcelaria, pone a los derechos humanos a merced del sistema de libre mercado. Esta situación convierte en productos a seres humanos y los presos, debido a su bajo estatus social, son particularmente vulnerables a abusos.

El artículo 10(3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“ICCPR”) y el artículo 58 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (“SMR”) establecen que el propósito principal del encarcelamiento debe ser la rehabilitación. No obstante, algunos países han mantenido o desplazado hacia una postura de “mano-dura” contra el crimen que enfatiza el impedimento, castigo, y venganza como objetivos principales del encarcelamiento.¹

Incompatibilidad entre incentivos del sector privado y el mantenimiento de derechos humanos

Los incentivos del sector privado son incompatibles con el mantenimiento de principios promovidos por los derechos humanos. La motivación fundamental de corporaciones dentro del sector privado es incrementar ganancias. En efecto, en varios estados de EE.UU. las corporaciones tienen la obligación legal de priorizar la acumulación de riquezas de sus accionistas sobre cualquier otra consideración.² En el contexto penitenciario, los reclusos se convierten en productos mediante los cuales se logra esta maximización de ganancias.

El artículo 9(1) del ICCPR establece que “nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.” Esta regla prohíbe la detención arbitraria pero además la califica como aquella que no encuadra con las leyes del Estado. En EE.UU. especialmente, la industria de prisiones privadas esquiva este principio mediante el cabildeo por legislación y leyes federales que incrementan el número de reclusos y canalizan dinero público hacia prisiones privadas.³

Detención arbitraria: poblaciones vulnerables

El encarcelamiento en sí priva al ser humano de uno de sus derechos más fundamentales, su libertad. Esta privación de libertad compone el castigo y se debe cuidar que el encarcelamiento no viole aun más los derechos y la dignidad humana del recluso.

¹ CRS Report for Congress, Federal Sentencing Guidelines: Background, Legal Analysis, and Policy Options, at 14, June 30, 2007; also, the U.K.’s Criminal Justice Act of 2003 §142 lists rehabilitation as merely one purpose to consider when determining an appropriate sentence.

² Dodge v. Ford, 204 Mich. 459, 1919; eBay v. Newmark, Court of Chancery of Delaware 16 A.3d 1, 2009.

³ Making a Killing: How Prison Corporations Are Profiting From Campaign Contributions and Putting Taxpayers at Risk, the American Federation of State, County and Municipal Employees, http://www.afscme.org/news/publications/privatization/pdf/AFSCME-Report_Making-A-Killing.pdf.

Hasta los países más desarrollados consideran necesario, como parte de un esquema putativo eficaz, despojar a reclusos de algunos de sus más básicos derechos humanos y civiles. En EE.UU., formas de discriminación generalmente prohibidas (e.g., en la vivienda y el voto) son aceptadas con respecto a criminales.⁴ Estos son particularmente vulnerables a abusos y la ONU ha adoptado dos cuerpos de leyes estableciendo normas mínimas para su cuidado.⁵

El incremento en la migración hacia países desarrollados ha conducido a un auge mundial en centros de detención de inmigrantes y ha creado un claro afán de lucro para compañías de prisiones privadas,⁶ así elevando la vulnerabilidad de inmigrantes a ser encarcelados y sometidos a abusos sistémicos.

A pesar de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria afirma que la detención de inmigrantes viola el principio de proporcionalidad y recomienda que dicha detención sea abolida,⁷ algunos Estados mantienen legislación que dicta la detención obligatoria de inmigrantes⁸ o se acomode a los métodos de agencias de control migratorio,⁹ muchas de las cuales contratan con compañías de prisiones privadas.¹⁰

El artículo 94 del SMR establece que personas detenidas por asuntos civiles “no serán sometid[a]s a mayores restricciones ni tratad[a]s con más severidad que la requerida para la seguridad y el mantenimiento del orden.” A pesar de que en Estados Unidos las leyes federales de inmigración son ejecutadas en procedimientos civiles, la distinción es meramente semántica. En práctica, la detención de inmigrantes sigue creciendo¹¹ mientras que la índole “civil” de estos encarcelamientos les niega aquellas protecciones legales básicas disponibles solo en acciones penales.¹²

Global Detention Project informa que mas de una docena de países permiten alguna forma de contratación privada en sus centro de detención de inmigrantes, incluyendo a EE.UU., Sudáfrica, el Reino Unido, y Australia.¹³

Datos recientes indican un número perturbadoramente desproporcionado de minorías bajo el sistema penitenciario de Estados Unidos con más de 1 de cada 9 hombres Afroamericanos entre 20-30 años de edad encarcelados.¹⁴

⁴ Michelle Alexander, In Prison Reform, Money Trumps Civil Rights, NY Times, May 14, 2011.

⁵ Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (1957); Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (1990)

⁶ Prison Economics Help Drive Ariz. Immigration Law, Laura Sullivan, NPR, <http://www.npr.org/2010/10/28/130833741/prison-economics-help-drive-ariz-immigration-law>.

⁷ Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Ginebra, febrero 2009, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.30_en.pdf.

⁸ Australia's Migration Act of 1958, http://www.hreoc.gov.au/human_rights/immigration/detention_rights.html; U.S. Immigration and Nationality Act §236(c)(1), §101(a)(43).

⁹ U.K.'s Nationality, Immigration, and Asylum Act 2002 §62; John Morton, Memorandum re: Civil Immigration Enforcement: Priorities for the Apprehension, Detention, and Removal of Aliens, May 2, 2011, <http://www.ice.gov/doclib/news/releases/2011/110302washingtondc.pdf>.

¹⁰ Nina Bernstein, Companies Use Immigration Crackdown to Turn a Profit, N.Y. Times, Sept. 28, 2011.

¹¹ Id.

¹² ACLU, Issue Brief: Criminalizing Undocumented Immigrants, http://www.aclu.org/files/assets/FINAL_criminalizing_undocumented_immigrants_issue_brief_PUB_LIC_VERSION.pdf.

¹³ The Privatization of Immigration Detention: Towards a Global View, Michael Flynn and Cecilia Cannon, September 2009, http://www.globaldetentionproject.org/fileadmin/docs/GDP_PrivatizationPaper_Final5.pdf.

El afán de lucro del sistema de prisiones privadas y su cabildeo por legislación de mano dura contra el crimen ha conducido directamente al número creciente de condenas por drogas que afectan desproporcionadamente a jóvenes afroamericanos ya que su aplicación es agresivamente dirigida hacia comunidades pobres de color.¹⁵ Estos actos violan varios artículos de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial.

Trabajo penitenciario

En reconocimiento de la vulnerabilidad de la población reclusa, existen varias provisiones de derechos humanos que buscan protegerla contra el trabajo penitenciario forzado.¹⁶

El trabajo forzado, como parte de un legítimo esquema de sentencias, se permite bajo ciertas circunstancias. No obstante, la tendencia hacia la privatización de la administración de prisiones ha llevado a la introducción de trabajo penitenciario para el lucro del sector privado. Esto viola el Convenio 29 sobre el Trabajo Forzoso u Obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, el cual específicamente prohíbe el uso de trabajo penitenciario para el beneficio del sector privado.

Camboya recientemente aprobó una ley que legalizaría el trabajo penitenciario forzado. Aunque el Gobierno insiste que la ley limitará este trabajo al sector público, informes indican que esta siendo usado en la fabricación de ropa para importantes marcas estadounidenses.¹⁷

El peligro de tal sistema en el contexto de prisiones privadas se evidencia en su evolución dentro de EE.UU. donde el cabildeo por parte de la industria está detrás de algunas de las leyes más agresivas respecto al uso de trabajo penitenciario para lucro privado. Se reporta que el American Legislative Exchange Council, una organización conservadora en gran parte responsable por legislación de mano dura contra el crimen, también ha tomado un rol fundamental en la abolición de prohibiciones en contra del uso de trabajo penitenciario en el sector privado.¹⁸

La criminalización de inmigrantes ha dejado una amplia brecha laboral en la industria agrícola estadounidense. En respuesta a esto, las prisiones privadas, que ya se benefician de la detención de dichos inmigrantes, ahora promueven políticas que permitirían remplazar a trabajadores agrícolas inmigrantes con trabajadores reclusos.¹⁹ Más perturbador aun, son denuncias que inmigrantes detenidos en instituciones privadas en el Reino Unido están siendo sometidos a trabajo penitenciario para el beneficio de la prisión y del empleador privado, así creando condiciones reminiscentes a la esclavitud.²⁰

¹⁴ How the Mass Incarceration of Black Men Hurts Black Women, *The Economist*, April 8, 2010.

¹⁵ Supra note 4.

¹⁶ ICCPR Article Art. 8(3)(a); ILO Convention number 29 on Forced or Compulsory Labor; SMR Articles 71, 72, 73, 76.

¹⁷ Sebastian Strangio, Cambodia: prison labor concerns, Dec. 11, 2011, *GlobalPost*, <http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/111206/cambodia-prison-labor-garments-exports-ILO>.

¹⁸ The Hidden History of ALEC and Prison Labor, Mike Elk and Bob Sloan, August 1, 2011, *The Nation*.

¹⁹ Alabama Agriculture Department Advances Plan To Replace Immigrant Workers With Prisoners, Marie Diamond, Dec 6, 2011, *ThinkProgress*, <http://thinkprogress.org/justice/2011/12/06/382852/alabama-agriculture-department-promoting-plan-to-replace-immigrants-with-prisoners-to-farmers/>.

²⁰ Jon Burnett and Fidelis Chebe, Captive Labour: Asylum Seekers, Migrants and Employment in UK Immigration Removal Centres, *Race and Class*, April 2010.

Recomendaciones

HRA insta al Consejo que considere las violaciones de derechos humanos inherentes en el sistema de prisiones privadas y recomienda su completa prohibición. A falta de una prohibición total HRA recomienda:

- Mayor supervisión y transparencia en prisiones privadas
 - La despenalización de inmigrantes y la abolición su detención arbitraria
 - Reforma de sentencias a fin de remediar su aplicación discriminatoria
 - Fortalecimiento de prohibiciones contra el trabajo penitenciario.
-